

Unos 3.000 particulares viven en Sevilla de la venta de chatarra recogida en vertederos y contenedores

Del rumano al parado

E. FREIRE
SEVILLA

La crisis ha echado a la calle a muchos parados a recoger chatarra. El perfil del particular con carrito o furgoneta, que expurga los contenedores y los vertederos de residuos que puede vender a los chatarreros, no es solo el del rumano o el indigente. Muchos desempleados locales están recurriendo a esta salida para conseguir unos ingresos.

Un chatarrero de barrio compra estos subproductos al peso. En muchos casos se utilizan hasta balanzas de precisión porque se paga al gramo o al kilo. Hasta la cadenita de un tapón de lavabo tiene su valor. Un carrito estándar de hipermercado, con una carga de un tubo metálico, un fregadero de acero inoxidable y varios trozos de hierro y ferralla rescatados de los escombros de una obra, puede cotizarse a 10 ó 15 euros. El cobre alcanza un precio superior.

Según un estudio realizado por Agresur (Asociación de Gestores de Residuos del Sur), más de 30.000 particulares viven en las provincias occidentales de Andalucía de la venta de chatarra. De éstos, alrededor de 3.000, en la provincia de Sevilla.

Esta patronal destaca la incidencia directa que tienen en este negocio los proveedores particulares, que, según el citado estudio, aportan la mitad del material y el 40% de la facturación al sector. Si se eliminaran, muchas pequeñas chatarrerías tendrían que cerrar, según asegura el presidente de Agresur, Rubén Barreno.

«Vista gorda»

La figura del «particular» está fuera de la ley. Agresur reclama un carné profesional para los recolectores de chatarra. «Con la ley en la mano, una persona no puede coger material de la calle y venderlo a una chatarrería. El contenedor solo puede tocarlo el Ayuntamiento», señala el presidente de dicha Asociación. No obstante, tanto en Andalucía, como en el resto de España, las autoridades hacen la vista gorda ante una práctica que esconde en muchos casos situaciones de auténtica necesidad social.

La cadena de la chatarra empieza en este recogedor de carrito o furgoneta, que vende los residuos férricos y metálicos a un chatarrero de barrio directamente o a un intermediario o empresario autónomo. Éste lo suministra al gestor homologado y de aquí los desechos metálicos van a un operador final, que los manufactura eliminando las impurezas y distribuyén-

dolos en lotes compactos para venderlos a la industria siderúrgica. Finalmente, este último eslabón los recicla en «materia secundaria», útil de nuevo para la industria.

En Andalucía, sólo una compañía —Siderúrgica Sevillana—, ubicada en Alcalá de Guadaíra, cierra el círculo de la chatarra. Por ello, esta localidad sevillana es un enclave de chatarreros, donde a lo largo de décadas se ha ido asentado un importante grupo de empresas del sector, locales y familiares, como Hermanos Olivias o Enrique de Frutos e Hijos; o multinacionales, como

Valor

La carga estándar de un carrito de hipermercado (tubos, un fregadero, hierros y ferralla) se cotiza unos 10 ó 15 euros

Carné profesional

La patronal Agresur pide que se legalice la figura del recogedor de chatarra

Lajo y Rodríguez. Son las firmas de mayor peso en Andalucía, con facturaciones por encima de los 15 millones de euros.

Agresur estima que en Andalucía operan unos 400 gestores intermedios de residuos (con planta de tratamiento final). Además, alrededor de 5.120 empresas y autónomos que negocian con la chatarra están en la órbita de esta Asociación, que aún tiene mucho recorrido hacia la zona oriental de la región.

Volumen y empleo

Los cuarenta gestores de residuos integrados en esta Asociación procesan alrededor de 240.000 toneladas de material al año, casi todo chatarras, aunque también procesan desechos de la maderas, vidrios y otros. La Asociación estima que este volumen supone un 70% de la producción andaluza, que, superaría las 350.000 toneladas. Las empresas asociadas facturan 150 millones de euros al año y dan empleo a 260 trabajadores.



De la actividad de los particulares depende el 40% de la facturación del sector

ROLDÁN SERRANO

AGRESUR DENUNCIA EL ATASCO DE 10.000 EXPEDIENTES EN MEDIO AMBIENTE

El colapso burocrático en la Junta comprime al sector

E. F.
SEVILLA

Un empresario que quiera abrir un negocio de gestión de residuos en Andalucía tiene que esperar entre dos y cuatro años para obtener la Autorización Ambiental Unificada (AAU) y entre uno y dos en el caso de la Certificación Ambiental (CA), documentos requeridos para poder ejercer esta actividad. Así lo refleja

un muestreo realizado por Agresur, que estima que hay más de 10.000 expedientes amontonados en las delegaciones provinciales de Medio Ambiente de la Junta, especialmente en la de Sevilla. La causa fundamental, según el presidente de esta patronal, Rubén Barreno, es la falta de personal. En la delegación



RUBÉN BARRENO

sevillana, por ejemplo, solo trabajan un técnico y un auxiliar tras el recorte de personal interino. Y antes de la ventanilla autonómica, en el Ayuntamiento la demora en tramitar una calificación ambiental a una chatarrería básica ronda los seis meses. Según Barreno, este «atasco burocrático» impide el desarrollo de este sector, muy dependiente de la agilidad administrativa. Hay que tener en cuenta que para retirar chatarra de un polígono industrial se necesita una autorización ambiental.